



Representantes de los sindicatos de las fuerzas de seguridad leyeron un comunicado conjunto en la concentración de ayer en Bilbao. MANU CECILIO

## LAS FRASES

**Roberto Seijo**  
Secretario general de ErNE

«Esta reforma nos desprestigia, resta credibilidad a los agentes y dificulta aún más nuestra labor diaria»

**Ramón Cossío**  
Portavoz del SUP

«Si todo el mundo graba nuestras intervenciones afectará a nuestro trabajo y estaremos expuestos al escarnio público»

**Juan Carlos Sáenz**  
SIPE

«Es incomprensible que, mientras la delincuencia sigue aumentando, se mermen los instrumentos para atajarla»

## Ertzainas, policías y guardias civiles se unen en Euskadi en defensa de la 'ley mordaza'

Los agentes denuncian que la modificación propuesta por PSOE y Unidas Podemos les deja «desprotegidos»

chazo a la modificación que, aseguran, les dejará «indefensos» y generará «el caos».

Representantes de numerosas organizaciones profesionales de policías municipales, de la Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil se reunieron en la protesta de la capital vizcaína. Todos criticaron que los partidos no les hayan consultado a la hora de formular este cambio normativo, que partió de una iniciativa del PNV.

«La reforma propuesta dificulta aún más nuestra labor», lamentó Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Uno de los puntos cardinales de la reforma es la difusión de imágenes de las actuaciones policiales. Los policías abogan por que cada agente lleve una cámara y que esas imágenes se

puedan usar para revisar sus actuaciones. En cambio, «si todo el mundo va a estar grabando nuestras intervenciones, vamos a estar más pendientes de eso que de otra cosa. Además, nuestra imagen estará expuesta a escarnio público», señaló Cossío.

Para ErNE, la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana ahonda en la «desprotección» de las fuerzas de seguridad. Así lo indicó su secretario general Roberto Seijo, quien aseguró que «esta norma nos desprestigia, resta credibilidad a los atestados de la Ertzaintza y nos quita seguridad en nuestro trabajo diario». En esa misma línea se expresó Juan Carlos Sáenz, de SIPE, quien criticó la creciente inseguridad en las calles de Euskadi y señaló directamente al PNV: «Este Go-

bierno y este consejero son lo peor que le ha pasado a este cuerpo en mucho tiempo. Es incomprensible que, mientras crece la delincuencia, se mermen los instrumentos para atajarla», lanzó y criticó la propuesta de retirada de las pelotas de goma.

### El PP en la concentración

La futura ley, que previsiblemente estará redactada para final de año, permite la convocatoria de movilizaciones sin comunicación previa. Ese cambio «complicará los operativos y pondrá en riesgo la seguridad ciudadana», critica Seijo. También se reducirá de seis a dos horas el límite de detención para ciudadanos que no se hayan querido identificar ante la autoridad. Otro obstáculo para las fuerzas de seguridad. Además, una

vez identificada, los agentes deberán trasladar a la persona en cuestión al lugar en el que haya sido detenido. «Todas son líneas rojas que la reforma rebasa de forma flagrante. Sin un marco legal adecuado, la salvaguarda de derechos y libertades se verá gravemente mermada», destacaron las fuerzas de seguridad en un comunicado conjunto.

Los populares vascos se sumaron al rechazo de la reforma que, según criticaron, «solo beneficia a los delincuentes». El presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturzaiz, lamentó «profundamente» que el cambio normativo cuente con el respaldo del PNV, ya que «desprotege a la Policía y deja a la ciudadanía sin libertad».

La formación conservadora aseguró que los datos de inseguridad ciudadana «siguen subiendo» en el País Vasco y que esta reforma «deja abandonadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado». Especialmente a los bilbaínos y vizcaínos, «que más estamos sufriendo la delincuencia», criticó la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González.

OLATZ HERNÁNDEZ



La reforma de la 'ley mordaza' acordada por PSOE y Unidas Podemos ha causado indignación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También en las filas de la Ertzaintza, cuyo sindicato mayoritario, ErNE, convocó ayer una concentración frente a la subdelegación del Gobierno en Bilbao para mostrar su re-

## Casado y Abascal abanderan la lucha contra la reforma en busca del mismo electorado

M. E. ALONSO

MADRID. PP y Vox acaban de sumar un nuevo frente a la batalla política que libran desde hace meses por el electorado más conservador. Las dos formaciones pugnan ahora por erigirse en los más firmes defensores de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana

que el Ejecutivo planea reformar y que ayer movilizó por toda España a sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Pablo Casado y Santiago Abascal en persona quisieron mostrar su apoyo a los agentes concentrados frente a la Delegación del Gobierno en Madrid y se comprometieron a «llegar hasta el final» para cam-

biar una normativa que, según destacan los colectivos policiales, les hará perder autoridad y les «coloca al mismo nivel que al delincuente».

El jefe de la oposición avisó de que irá al Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó con mayoría absoluta en 2015,

y si llega al poder retrotraerá la reforma que solo beneficia «a los socios radicales de este Gobierno». «No vamos a tolerar este atropello a la protección de quienes nos protegen, sin seguridad no hay libertad», aseveró Casado, a escasos metros de Abascal.

El líder de Vox denunció que la derogación «condena» a los agentes y a los ciudadanos «a la inseguridad y a la violencia» y «protegerá» a los delincuentes. «No protege a los ciudadanos pacíficos que se manifiestan, solo a los que tienen intención de saltarse las

normas —añadió—, atacar la convivencia y apelar a la violencia».

Ciudadanos quiso mostrar también su respaldo a los policías y guardias civiles y envió a la movilización en la capital, que sirvió de antesala a la multitudinaria manifestación que se espera para este sábado, a su vicesecretario general, Edmundo Bal. El liberal acusó al Ejecutivo de impulsar una normativa «sin consenso ni diálogo» y que lanza a la ciudadanía el mensaje equivocado de que no debe confiar en la Policía. Y así, señaló, «no se puede trabajar».